



La mediación previa a juicio: entre el mandato constitucional y la cultura de paz / Pre-Judicial Mediation: Between the Constitutional Mandate and the Culture of Peace

Marco Antonio Gonzalez Reynoso¹

La mediación ha recorrido en México un camino sinuoso desde aquella primera Ley de Justicia Alternativa promulgada en Quintana Roo en 1997. A esa norma pionera le siguió la reforma constitucional de 2008, que incorporó la obligación de que las leyes contemplen mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), y más recientemente la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, publicada en enero de 2024, que fijó los mínimos que deben cumplir todas las leyes estatales de mediación del país.

En cada una de estas etapas, la mediación ha debido vencer la resistencia de algunas áreas del propio Poder Judicial y de la abogacía litigante, la insuficiencia presupuestal para crear centros estatales de mediación, y el hecho de ser un mecanismo entonces novedoso. Pese a ello, se ha ido abriendo paso al demostrar su utilidad práctica.

Esta resistencia se hizo tangible, hace apenas unos días, en una sobremesa entre un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un secretario de estudio y cuenta de ese alto tribunal,

Mediation has followed a winding path in Mexico since the first Alternative Justice Law was enacted in Quintana Roo in 1997. That pioneering statute was followed by the 2008 constitutional reform, which established the obligation for laws to provide for alternative dispute resolution mechanisms (ADR), and more recently by the General Law on Alternative Dispute Resolution Mechanisms, published in January 2024, which set the minimum standards that all state mediation laws in the country must meet.

At each of these stages, mediation has had to overcome resistance from certain sectors within the Judiciary itself and among litigating attorneys, insufficient budgets to create state mediation centers, and the fact that it was, at the time, a novel mechanism. Despite this, it has steadily gained ground by proving its practical usefulness.

This resistance became tangible just a few days ago, over an after-dinner conversation among a former minister of the Supreme Court of Justice of the Nation, a clerk of that high court, the

¹Maestro en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Corredor Público No. 80 de la Plaza de la Ciudad de México. marco@gonzalezreynoso.com. / Master of Laws (LL.M.) in International Business Law from Universidad Iberoamericana. Master's Degree in Criminal Law from the University of Seville. Public Broker No. 80 for the Mexico City Jurisdiction.



quien esto escribe y un mentor en mediación que ha participado en el diseño del propio Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. El argumento judicial fue el de siempre: no puede imponerse un costo adicional al acceso a la justicia; la mediación, se dijo, sólo encarecerá el litigio. Es un argumento razonable desde el escritorio, pero que no resiste el contraste con la calle: quien enfrenta un conflicto no acude a su computadora a redactar una demanda y presentarla por su cuenta.

Contratar a un abogado, que cobra por redactar el escrito y que después mantiene una iguala mensual, es un esquema que, sin proponérselo necesariamente, coloca al litigante del lado equivocado del incentivo: entre más dure el conflicto, más ingresos genera. El costo de una mediación, pública o privada, rara vez supera el de esa relación contractual; y el mediador, a diferencia del abogado, no tiene más interés económico que el de cerrar el conflicto pronto, sin igualas ni controversias adicionales.

Vale admitir con honestidad que quien media también tiene un interés propio en que la mediación se vuelva obligatoria, pues eso multiplicaría sus asuntos. Reconocerlo no invalida el argumento, pero sí obliga a no dejar la decisión únicamente en manos de quienes, por oficio, tenemos algo que ganar o perder en el resultado: jueces, litigantes y mediadores por igual.

author of this note, and a mediation mentor who has taken part in designing the Mexico City Alternative Justice Center itself. The judicial argument was the usual one: an additional cost cannot be imposed on access to justice; mediation, it was said, will only make litigation more expensive. It is a reasonable argument from behind a desk, but one that does not hold up against the reality of the street: a person facing a conflict does not sit down at a computer to draft a claim and file it on their own.

Hiring a lawyer, who charges for drafting the complaint and then keeps a monthly retainer, is a scheme that, without necessarily intending to, places the litigant on the wrong side of the incentive: the longer the conflict lasts, the more income it generates. The cost of mediation, whether public or private, rarely exceeds that of such a contractual relationship; and the mediator, unlike the lawyer, has no economic interest beyond closing the conflict quickly, without retainers or additional disputes.

It is worth honestly admitting that whoever mediates also has a personal interest in mediation becoming mandatory, since that would multiply their caseload. Acknowledging this does not invalidate the argument, but it does require not leaving the decision solely in the hands of those who, by profession, have something to gain or lose from the outcome: judges, litigating attorneys, and mediators alike.



Si se preguntara a cualquier persona si prefiere resolver un conflicto en una semana o en tres años, o si prefiere cobrar una sola vez o durante varios años, las respuestas revelarían más sobre las verdaderas preferencias sociales que cualquier debate entre profesionales del derecho. Tal vez la ruta más honesta no sea que la decisión la tome el gremio jurídico, sino que se someta a consulta pública, con datos de por medio, para que sea la sociedad, y no solamente quienes viven del conflicto o de su solución, quien determine el rumbo.

El fundamento para dar un paso más — convertir a la mediación en un requisito previo al juicio, ya sea como requisito de procedibilidad o como presupuesto procesal— se encuentra en el propio artículo 17 constitucional, que ordena a las autoridades privilegiar la solución de los conflictos por encima de los formalismos procesales. Leído con atención, ese mandato apunta en una dirección clara: la mediación antes del juicio, no como una etapa posterior a su inicio.

Esta lectura no es aislada. El autor español Óscar Daniel Franco Conforti sostiene que la obligatoriedad de la sesión informativa no riñe con el principio de libertad de la mediación, y advierte que debe abandonarse la idea de que, en sede judicial, la mediación obligatoria es más perniciosa que la voluntaria.

La tendencia internacional confirma este rumbo: países como Argentina (1995),

If any person were asked whether they would rather resolve a conflict in one week or in three years, or whether they would rather be paid once or over several years, the answers would reveal more about genuine social preferences than any debate among legal professionals. Perhaps the most honest path is not for the legal profession alone to make this decision, but for it to be submitted to public consultation, informed by data, so that it is society — and not only those who make a living from conflict or its resolution — that determines the course to follow.

The basis for taking this a step further — turning mediation into a requirement prior to litigation, whether as a condition of admissibility or as a procedural prerequisite — lies in Article 17 of the Constitution itself, which orders authorities to give priority to resolving conflicts over procedural formalities. Read carefully, that mandate points in a clear direction: mediation before litigation, not as a stage that follows its commencement.

This reading is not an isolated one. Spanish author Óscar Daniel Franco Conforti argues that making the informational session mandatory does not conflict with the principle of freedom in mediation, and cautions that the notion that mandatory judicial mediation is more harmful than voluntary mediation should be abandoned.

The international trend confirms this direction: countries such as Argentina



Perú (1997), Colombia (2001), Brasil (2015), Italia (2010), Francia (2016), España (2024) o Singapur (2017), entre muchos otros, ya cuentan con mediación previa obligatoria, de carácter general o sectorial. Todo indica que es cuestión de tiempo para que México modifique la Ley General de MASC, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares — cuya entrada en vigor plena está prevista, a más tardar, para el 1 de abril de 2027— o incluso la propia Constitución, como ya ocurrió en materia laboral.

Con esa convicción, resulta pertinente plantear reformas concretas: al artículo 17 constitucional, para exigir que no se inicien juicios sin haber intentado antes algún mecanismo alterno de solución pacífica de controversias; al artículo 8 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para incorporar ese intento como requisito del ejercicio de la acción; a la Ley General de MASC, para establecerlo como estándar nacional armonizador; y a las leyes locales de mediación, para que la autoridad jurisdiccional, antes de fijar la litis, informe a las partes sobre la mediación y las remita a una sesión informativa.

Pero exigir la mediación como paso previo no basta si no se cuida la calidad de ese paso. La vocación por los mecanismos alternativos nace de la experiencia cotidiana de ver expedientes crecer innecesariamente cuando lo que hacía falta era diálogo

(1995), Peru (1997), Colombia (2001), Brazil (2015), Italy (2010), France (2016), Spain (2024), and Singapore (2017), among many others, already have mandatory pre-litigation mediation, whether general or sector-specific in scope. Everything suggests it is only a matter of time before Mexico amends the General Law on ADR Mechanisms, the new National Code of Civil and Family Procedure — whose full entry into force is set for no later than April 1, 2027 — or even the Constitution itself, as already happened in labor matters.

With that conviction in mind, it is worth proposing concrete reforms: to Article 17 of the Constitution, to require that no lawsuit be filed without first attempting some alternative mechanism for the peaceful resolution of disputes; to Article 8 of the new National Code of Civil and Family Procedure, to incorporate that attempt as a requirement for exercising the action; to the General Law on ADR Mechanisms, to establish it as a harmonizing national standard; and to local mediation laws, so that the judicial authority, before framing the issues in dispute, informs the parties about mediation and refers them to an informational session.

But requiring mediation as a prior step is not enough if the quality of that step is neglected. The commitment to alternative mechanisms grows out of the everyday experience of watching case files grow needlessly when what was actually needed was timely dialogue.



oportuno. Esa intuición encuentra respaldo académico en la Justicia Terapéutica (Therapeutic Jurisprudence), que parte de una premisa sencilla pero profunda: el derecho no sólo resuelve controversias, también produce efectos emocionales y sociales en quienes lo viven.

Por ello, la obligatoriedad de la mediación previa debe acompañarse de tres líneas de fortalecimiento. Primero, la profesionalización real de quienes facilitan estos procesos, con estándares claros, formación continua y especialización según la materia del conflicto. Segundo, la articulación de los MASC con el resto del sistema de justicia, como una ruta ordenada y no como espacios aislados. Y tercero, la calidad del proceso mismo: no basta con contar cuántos convenios se firman, sino observar qué efectos producen en las personas que participan, porque si el proceso no genera confianza, la estructura legal pierde sentido.

Los MASC han dejado de ser una figura marginal para convertirse en una herramienta institucional relevante; hoy ya no se discute si deben existir, sino cómo hacerlos funcionar mejor. El reto principal sigue siendo cultural: venimos de una tradición jurídica adversarial en la que se asume que el conflicto sólo puede resolverse mediante una decisión formal. Cambiar esa lógica requiere práctica, paciencia y resultados que generen confianza, así como una voz

That intuition finds academic support in Therapeutic Jurisprudence, which starts from a simple but profound premise: the law does not merely resolve disputes, it also produces emotional and social effects on those who experience it.

For that reason, making prior mediation mandatory must be accompanied by three lines of strengthening. First, the genuine professionalization of those who facilitate these processes, with clear standards, continuous training, and specialization according to the subject matter of the conflict. Second, the integration of ADR mechanisms with the rest of the justice system, as an orderly pathway rather than as isolated spaces. And third, the quality of the process itself: it is not enough to count how many agreements are signed; what matters is observing what effects they produce on the people who take part, because if the process does not generate trust, the legal structure loses its meaning.

ADR mechanisms have ceased to be a marginal figure and have become a relevant institutional tool; today the debate is no longer whether they should exist, but how to make them work better. The main challenge remains cultural: we come from an adversarial legal tradition in which it is assumed that conflict can only be resolved through a formal decision. Changing that logic requires practice, patience, and results that build trust, as well as a different institutional



institucional distinta, más clara y accesible, que abra espacios donde el conflicto pueda ser entendido antes de ser juzgado.

La convergencia de estos dos planos — el mandato constitucional y la evidencia comparada, por un lado, y la exigencia de profesionalización y calidad humana del proceso, por el otro— apunta hacia un mismo destino: que la mediación se convierta en el mecanismo ordinario de solución de conflictos, y el juicio en el recurso al que se acude sólo cuando aquélla no ha bastado. Enfrentar los retos que representa la mediación previa a juicio es preferible a mantener, por inercia, la prioridad de los formalismos procedimentales sobre la solución real, pacífica y de fondo del conflicto.

voice — clearer and more accessible — that opens spaces where conflict can be understood before it is judged.

The convergence of these two dimensions — the constitutional mandate and comparative evidence, on one hand, and the demand for professionalization and human quality in the process, on the other — points toward the same destination: that mediation become the ordinary mechanism for resolving conflicts, and litigation the recourse used only when mediation has not been enough. Facing the challenges posed by pre-litigation mediation is preferable to maintaining, out of sheer inertia, the priority of procedural formalities over the real, peaceful, and substantive resolution of conflict.

Fuentes consultadas / References

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Diario Oficial de la Federación.
- Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [artículo 17, reformado 2008]. Diario Oficial de la Federación.
- Congreso de la Unión. (2023). Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Diario Oficial de la Federación.
- Franco Conforti, O. D. Mediación obligatoria y principio de libertad en la mediación.
- Vargas Pavez, M. La ineficacia de la mediación judicial voluntaria y la reforma hacia la mediación previa obligatoria en Chile.
- Villani, M. Requisitos de la mediación previa al juicio frente al derecho a la tutela judicial efectiva.
- Wexler, D. B., & Winick, B. J. (1991). Essays in therapeutic jurisprudence. Carolina Academic Press.